

DIEGO SAN JOSÉ ANTE EL JUZGADO MILITAR DE PRENSA

Juan A. Ríos Carratalá

Ja.rios@ua.es

El escritor Diego San José (1884-1962) creía haberse librado de las represalias de los vencedores por no tener «las manos manchadas de sangre». Su talante de hombre pacífico era incompatible con semejante posibilidad. El veterano polígrafo también confiaba en sus muchos años de amistad con Pepito, el general Millán Astray al que poco antes de la guerra dedicó una biografía y para el que trabajaría como «negro» en las terceras de *ABC* durante la posguerra, cuando el periodista penaba en las cárceles. Sus otras amistades entre las personas de «probada solvencia moral» le podrían igualmente proteger. El cálculo respondía a la lógica de una convivencia civilizada, pero el escritor fue detenido en su domicilio madrileño de la calle Torrijos, n.º 69, 4.º izquierda, el 10 de abril de 1939, apenas diez días después de terminada la guerra y mientras padecía los rigores de una hernia inguinal que le sería diagnosticada, mediante certificado médico, por el doctor Víctor Manuel Noguerras. La condición de hombre maduro con sus previsibles quebrantos de salud representaba un problema añadido para los derrotados que, convertidos en presos, volvían a una disciplina cuartelera sin esperanza de recuperar la juventud del servicio militar. La «licencia absoluta» podía ser, además, un eufemismo tan trágico como el de La Pepa, según la popularizada versión de Alvarito Retana, que también penó lo suyo en las cárceles del franquismo.

Diego San José era un madrileñista de pura cepa y un excelente conocedor de su ciudad natal, cuyo anecdotario histórico le sirvió a menudo de inspiración. Su figura literaria cuenta con una amplia bibliografía que completó con la colaboración en distintas cabeceras. Así se labró un nombre en los círculos literarios, sacó adelante a su familia y su legado de folletos, novelas y cuadros costumbristas de otros tiempos ha quedado ligado a la capital, de la que fue cronista en innumerables publicaciones. No obstante, desde 1944, el Madrid tantas veces recreado en sus textos periodísticos o literarios formó parte de un

pasado para la melancolía compartida con la máquina de escribir. El periodista de numerosas cabeceras debió alejarse de su ciudad natal para sobrevivir y se había afincado por entonces en Redondela junto a su familia. Las autoridades carcelarias de aquel franquismo, poco dadas al olvido, le comunicaron su «liberación definitiva» mediante un escrito firmado en Vigo. La misma tuvo lugar el 10 de febrero de 1958, cuando Diego San José había superado la barrera de los setenta años y, según el documento del director de la cárcel, lucía un pelo canoso. De hecho, ya no debía ser un periodista capaz de «excitar a la resistencia» contra el Glorioso Movimiento Nacional, delito por el que su pena debería extinguirse el 9 de abril de 1959.

La edad, el sufrimiento y el silencio en público desde 1939 habrían contribuido a ese color ceniza de la cabellera de un republicano de baja estatura e inquieto, al que sus amigos, tan heterogéneos como numerosos, llamaban Dieguito. El cariñoso nombre evocaba los tiempos de los felices años veinte y la II República, cuando el redactor de *El Liberal y Heraldo de Madrid* era un habitual de las tertulias al tiempo que un incansable animador de los ambientes literarios sin menoscabo de los teatrales.

El testimonio de la obra titulada *De cárcel en cárcel* (Sevilla, Renacimiento, 2016) quedó inédito en vida del autor porque sus páginas dan cuenta de la detención, el proceso y el encarcelamiento de Diego San José en la España de la posguerra. La censura no habría permitido su publicación. Ni siquiera se hicieron gestiones en tal sentido por la obviedad de la previsible respuesta. El testimonio del escritor y periodista evidencia un clima de represión, miedo y arbitrariedad que apenas puede ser subrayado. La brutalidad de algunos episodios no admite los matices de la ponderación, aunque el autor hace gala de la misma sin que se atisbe la presencia del rencor en sus memorias carcelarias. Diego San José conservó la integridad moral a pesar de la derrota.

El revisionismo de quienes abogan por un olvido del franquismo rehúye las pruebas concretas de los testimonios para ampararse en generalidades, en cuyo marco se diluye cualquier posible responsabilidad y la retórica propagandista cobra protagonismo. Frente a esa actitud ventajista para propiciar el confusiónismo, y como prueba del verismo de Diego San José en lo esencial de la obra citada, presentamos un extracto del extenso expediente judicial del autor,

que nos fue facilitado por su familia y se encuentra depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa. El memorialista madrileño no pudo escribir *De cárcel en cárcel* con esta documentación a la vista. Ni siquiera llegó a tener conocimiento de algunas circunstancias relacionadas con su proceso porque nunca contó con un abogado defensor. No obstante, a la hora de recordar sus experiencias carcelarias evitó dejarse llevar por la imaginación, salvo cuando Diego San José recurre a las licencias literarias que intercala con la ironía de un asiduo lector de los clásicos.

Vayamos a «los hechos probados» del sumario. La tarde del 10 de abril de 1939, concretamente a las 20,30 horas, los agentes Francisco Cano Herranz y Federico Sanz García manifiestan ante el inspector de guardia que han procedido a la detención del escritor «por ser elemento conocidísimo de izquierdas». El por entonces delito contaba con agravantes en su caso porque, durante «los años del terror rojo en Madrid», Diego San José no había «cesado de excitar a las masas a la comisión de toda clase de delitos desde la prensa roja», al tiempo que vertía «los insultos más soeces y viles contra la persona del Generalísimo y las Gloriosas Tropas Nacionales». La declaración de los agentes que actuarían a partir de una denuncia anónima no va acompañada de pruebas. Los policías, probablemente militares, tampoco aportan referencias concretas para verificar si Dieguito había excitado a las masas, una posibilidad que roza el absurdo para cualquier conocedor de su trayectoria.

Diego San José declaró a continuación en la sede de la brigada especial de la división de investigación política agregada al S.I.P.M., sita en la calle de Almagro. Las dependencias de la policía militar se multiplicaron por entonces en una ciudad literalmente ocupada. El periodista, poeta, dramaturgo y autor de numerosas novelas cortas reconoce sus colaboraciones en *El Liberal* y *Heraldo de Madrid*, pero calla todo lo relacionado con otros escritos del mismo período, más comprometedores a veces, y alega que los artículos publicados en ambos periódicos eran abocetados por sus directores. Su colaboración, por otra parte, «no ha sido nunca espontánea y sí obligada por el terror que de él se apoderó ante los asesinatos de los rojos». Incluso dice tener «tendencias particulares de derechas» que algunos de sus amigos, bien seleccionados, podrían probar. La condición heroica suele ser una licencia de la ficción o una muestra de la

resignación ante lo inevitable, como en los casos del periodista Javier Bueno y el poeta Miguel Hernández. El objetivo de Diego San José era sobrevivir para reencontrarse con su familia.

Al día siguiente, el titular del Juzgado de Instrucción Militar n.º 12 recibió el atestado e interrogó de nuevo al detenido. Diego San José busca avales entre sus amistades de derechas con la colaboración de su familia y añade en esta ocasión la conveniencia de recabar los testimonios de un «propietario» y amigo de Navalcarnero, Marcelo Gómez López, y de su hijo Marcelo, a quienes alojó en su casa de Madrid durante tres meses mientras eran «perseguidos por los rojos». El riesgo asumido en nombre de la amistad podría convertirse en un mérito a los ojos de los vencedores. Además, el escritor reivindica su intervención en la liberación del contertulio y empresario teatral Tirso García Escudero, así como la de su hijo Manuel, ambos pendientes de ser condenados por un tribunal popular cuando, el 5 de octubre de 1936, recobraron la libertad para reincorporarse a la quinta columna. Y, por último, Diego San José habla de su intervención para intentar salvar la vida del comediógrafo Pedro Muñoz Seca, extremo que junto a las anteriores gestiones le valieron su destitución como responsable de prensa en la Dirección General de Seguridad (7 de noviembre de 1936).

Diego San José eligió las cartas adecuadas para el envite del procesamiento y no era un fanfarrón a la hora de aducir méritos de amistad. El riesgo de quedar al descubierto resultaba disuasorio en aquellos procesos. El agradecido Tirso García Escudero, apenas supo de la detención del escritor, compareció voluntariamente el 18 de abril de 1936 ante el citado juzgado. Allí corroboró lo afirmado por su amigo. El testigo hace valer su condición de «hombre sin tacha» o «afecto al Régimen» y añade que, si el procesado «colaboró en periódicos durante el dominio rojo, fue debido a [motivos profesionales], impidiendo el citado escritor que se publicara un suelto en que se denunciaba al testigo como implicado en la rebelión del 10 de agosto». La participación en la sanjurjada del verano de 1932 no era precisamente un mérito en el Madrid sitiado.

El propietario y «significado derechista» Marcelo Gómez López, en su declaración del 3 de julio de 1939, también corroboró ante el juez militar lo afirmado por el periodista. Durante la guerra, Diego San José afrontó el riesgo

de declarar a su favor ante un tribunal popular y cobijarle después de salir de la cárcel, «dándole toda clase de medios y facilidades». La amistad desde niños se había impuesto a las diferencias ideológicas, aunque no pudo ser corroborada por el hijo de don Marcelo porque no fue localizado por el juzgado.

La hoja de méritos del procesado habría sido exculpatória en un clima donde el concepto de reconciliación hubiera tenido, al menos, una remota presencia. No obstante, la lógica procesal de los vencedores respondía al objetivo del exterminio de cualquier atisbo de republicanismo. La Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación decide, pues, el 17 de abril iniciar los trámites para «instruir juicio sumarísimo de urgencia, con el número 2625 de esta Auditoría» y contra Diego San José de la Torre. La firma corresponde al auditor Ángel Manzaneque Flaquer. El procedimiento se acoge al decreto publicado el 1 de noviembre de 1936, cuando la toma de Madrid parecía inminente y solo se buscaba la celeridad, aunque fuera en detrimento de las garantías jurídicas. De hecho, nunca las hubo en estos procesos donde los encausados carecían de abogado defensor y permanecían al margen de buena parte de los trámites.

El 24 de mayo de 1939, el Juez Militar Permanente n.º 3 dicta una providencia por la que se remite el sumario de Diego San José al Juez Militar de Prensa dada la naturaleza de los posibles delitos. Mientras tanto, el periodista seguía penando en la abarrotada cárcel de Porlier, donde su precario estado de salud se agravó. El 14 de junio de 1939, el optimista madrileño solicita al juez de prensa, Manuel Martínez Gargallo, la prisión atenuada o la libertad provisional para cuidar su maltrecha salud y volver con su familia dado que no había riesgo de fuga. El juez -según su escrito- podía tener «la seguridad absoluta» de que estaría «a disposición del tribunal cuantas veces se [le ordenara]». El procesado parece todavía ajeno a la lógica punitiva de la Victoria. El antiguo humorista no era hombre de favores devueltos, como se comprueba en el caso de Joaquín Sama, y al día siguiente deniega la libertad provisional sin necesidad de argumentos. El viejo conocido de los ambientes literarios se muestra inflexible y dicta, además, una providencia para interrogar de nuevo al procesado, recibir la declaración de los testigos que aquél pudiera citar y aportar los datos que existan acerca de sus actividades profesionales.

A resultas de esta última providencia, Diego San José declara el 27 de junio de 1939. El periodista manifiesta ante el juez y su secretario no haber estado afiliado a partidos políticos, aunque reconoce haber votado al Frente Popular en febrero de 1939. Acerca de su cargo en la Dirección General de Seguridad, asume haber mantenido «una amistad remotísima con el funesto Azaña» y señala a Ceferino Palencia Tubau, hijo del dramaturgo Ceferino Palencia, como el responsable de la gestión para ocupar un puesto que le suponía una remuneración de doscientas cincuenta pesetas mensuales. La cantidad es similar a la que ganaba el dibujante Echea por sus colaboraciones en la prensa madrileña durante la guerra. El sueldo lo recibía a cambio de «señalar en la prensa de Madrid lo que atañía a la función de policía, es decir, una especie de información para el director, que estaba desligada de toda función política». El interrogado sabía que su supuesto benefactor andaba por Méjico, lejos de la policía franquista, circunstancia que probablemente no se diera en el caso de su amigo Ramón Fernández Mato, el responsable de la burocrática y modesta canonjía. La táctica de inculpar al ausente se repite en otros interrogatorios del Juzgado Militar de Prensa.

Asimismo, el periodista declara que también había colaborado en la prensa derechista (*ABC*, *Blanco y Negro*...) y que, como fruto de una vieja amistad, era el autor de una inédita biografía del general José Millán Astray. Ambos datos son ciertos, pero nunca fueron objeto de una verificación por parte del juzgado. Diego San José niega que en sus artículos -cobraba treinta pesetas por cada uno publicado- vertiera «conceptos injuriosos para el Caudillo, así como para nuestro Glorioso Movimiento Nacional». Más adelante, el periodista recuerda sus gestiones para obtener la libertad de Tirso García Escudero y Pedro Muñoz Seca y, tras rechazar que en «la prensa roja» excitara a las masas a la comisión de delitos, solicita que sean recabados los testimonios de los escritores Emilio Carrere y Cristóbal de Castro, el empresario Tirso García Escudero, «el victorioso general Millán Astray», el sacerdote Antonio Rey Soto, el propietario Marcelo Gómez López y los actores José García del Portillo y Emilio Tuiller. Todos ellos caballeros de «probada solvencia moral» y afectos al Régimen.

Además de las ya citadas, el sumario de Diego San José incluye las declaraciones ante el Juzgado Militar de Prensa de Cristóbal de Castro (30-VI-1939) -el procesado es «persona de buenos sentimientos, decente y honrada»-,

el actor José García del Portillo (30-VI-1939) -el periodista es «persona a quien le repugnan todos los crímenes cometidos por los rojos»-, el citado sacerdote y poeta (15-XI-1939) -Diego San José es «una excelente persona, muy buen amigo y magnífico escritor»- y del novelista Emilio Carrere (3-X-1939), quien considera que la actuación del procesado durante «la revolución roja debió ser impuesta por [...] el miedo insuperable». El popular escritor de la bohemia madrileña por entonces era un ferviente partidario de los vencedores, pero ignoraría que dicho miedo nunca supuso un atenuante en el Juzgado Militar de Prensa. Por otra parte, a pesar de ser un sumarísimo de urgencia, las declaraciones de los avalistas se prolongaron durante un mínimo de cinco meses, durante los cuales nunca terminaron de llegar los informes policiales solicitados. Así lo reconoce el juez en una providencia firmada el 29 de julio de 1939, aunque Manuel Martínez Gargallo decide prescindir de los mismos «a fin de no demorar la conclusión de la causa».

Todos los testimonios de los avalistas son favorables y corroboran lo declarado por el periodista, aunque nunca fueron tenidos en cuenta de manera explícita a lo largo del proceso. Ni siquiera son citados como posibles atenuantes. Los vencedores sabían que, para evitar el sentimentalismo de los civiles, la represión debía ser competencia exclusiva del Ejército y ajustarse a lo establecido por el citado decreto del 1 de noviembre de 1936, que jamás contempla la existencia de atenuantes. Por otra parte, el juez Manuel Martínez Gargallo, consciente de las jerarquías, no dictó providencia alguna para que «el victorioso general y caballero mutilado» declarara acerca de su amigo, contetulio y biógrafo. Las decisivas gestiones del también caballero legionario se llevaron a cabo con discreción a instancias de la familia del procesado.

Para completar la fase de instrucción del consejo de guerra, el capitán Manuel Martínez Gargallo cuenta con el testimonio de la ficha del periodista, depositada en el juzgado como tantas otras y extractada por el secretario del mismo el 15 de julio de 1939. El alférez del Cuerpo Jurídico dio fe y testimonio de acuerdo con un procedimiento que se repite en los demás procesos, siempre como paso previo a la instrucción. El juez ordena en esta ocasión al secretario que, además, elabore un informe sobre la actividad profesional del procesado. Ante «la inexistencia de ejemplares atrasados de los diarios *El Liberal* y *Heraldo de*

Madrid, por lo que resulta imposible la unión de estas actuaciones de alguno o algunos de los artículos publicados por el encartado» -según la providencia del 5 de julio-, el alférez consulta en la Hemeroteca Municipal de Madrid la colección de *El Liberal*, extracta un total de once artículos de Diego San José publicados entre el 10 de noviembre de 1936 y el 2 de junio de 1937, manifiesta no haber consultado los de *Heraldo de Madrid* «por considerar que como quiera que son de índole semejante no hay precisión de hacer más extenso este informe» de seis folios y, con fecha del 27 de julio de 1939, eleva al juez el correspondiente informe. La ausencia de los artículos publicados en *Heraldo de Madrid* no impidió que los mismos, aludidos de forma genérica, figuraran entre los hechos probados durante el resto del proceso, incluida la sentencia a muerte de Diego San José.

Asimismo, el secretario da fe y testimonio de la ficha depositada en el juzgado, donde se califica a Diego San José como «un tenaz defensor de la causa marxista» que injurió «constante y tenazmente no solo a los ideales que encarnaron el Glorioso Movimiento Nacional sino al Caudillo, a sus generales y, sobre todo, al clero, que es la obsesión de sus trabajos literarios». Ante la posibilidad de que los informes suministrados «por organismos y personalidades de absoluta solvencia» no estuvieran completos, el secretario añade un párrafo sacado de esos mismos informes que resultaría crucial para el fiscal: Diego San José «ha sido un tenaz defensor de la causa marxista y no se recató nunca en hacer constar en público y privado que España era víctima de una invasión extranjera y que caso de ganarse la guerra por el Generalísimo Franco quedaría reducida a una simple colonia de Alemania e Italia».

El secretario, convertido en testigo que levanta acta de unos ignotos informes de autoría desconocida, considera en su testimonio ante el juez que todos los artículos extractados -no puede aportar los originales al sumario para su debida comprobación- son de «tonos violentísimos» por su casi inevitable relación con el marxismo. La aparición de este último concepto garantiza la condena en los sumarísimos de urgencia celebrados durante la posguerra, incluso cuando las supuestas huellas de Carlos Marx o sus seguidores se perciben en los textos de quien tenía a Galdós y Larra como referentes ideológicos a la par que literarios. El alférez del Cuerpo Jurídico era joven y probablemente no contaría entre los lectores de los folletos históricos de Diego San José, pero esas mismas

referencias las tenía en los párrafos extractados en su propio informe: «¡Con qué certeros y agudos apóstrofes hubiera condenado Galdós la traición y perfidia de Franco, Mola y demás bandoleros de su cuadrilla!», «si Fígaro viviera sería cronista del Frente Popular»... Las citadas frases no son precisamente un ejemplo de rigor histórico, pero explicitan los nombres de unos referentes que pasan por ser unas constantes de la obra histórica y literaria de Diego San José.

De hecho, estos sumarios apenas consultados por los historiadores de nuestra cultura abren posibilidades infinitas para detectar y valorar la extensión del «marxismo» en las letras españolas. Convendría analizar esta posibilidad, aunque los miembros del Cuerpo Jurídico Militar nunca aporten argumentos concretos o citen la supuesta procedencia filosófica de las ideas extractadas en sus testimonios e informes. El concepto de marxismo se utiliza a modo de comodín de amplio espectro y, sin verificación, su inclusión basta para garantizar la condena. El testimonio del secretario adscrito al Juzgado Militar de Prensa, fechado el 15 de julio de 1939, resultó decisivo para la petición de la pena de muerte por parte del fiscal, que confió en la palabra del alférez sin consultar los originales de los informes y hacer una valoración propia y argumentada de los mismos. A estos efectos, bastaba con que hubieran sido emitidos por personas tan desconocidas como de «probada solvencia moral», una virtud que también garantizaba la competencia para la exégesis de cualquier texto marxista.

El 30 de agosto de 1939, el juez Manuel Martínez Gargallo -amigo de César González Ruano, uno de los pocos enemigos, declarados, de Diego San José- ratifica el procesamiento del periodista mediante un auto resumen porque «este individuo de ideas rotundamente contrarias al Movimiento Nacional llevó a cabo desde las columnas de los periódicos *El Liberal* y *Heraldo de Madrid*, ambos de gran difusión, una campaña de inequívoca trascendencia contra tan Glorioso Movimiento, vertiendo toda clase de injurias contra los ideales que lo encarnaban, la figura del Jefe del Estado y la de sus generales más afectos a todos los cuales pinta constantemente como vulgares traidores y enemigos del pueblo, con todo lo cual contribuyó en la medida de sus fuerzas no solo a la prolongación de la resistencia contra el Ejército Nacional sino a engañar a los lectores de buena fe acerca de las verdaderas intenciones del Movimiento iniciado el 18 de julio de 1936». El auto resumen lo firman el juez y el secretario

sin haber consultado los ejemplares de *Heraldo de Madrid*. El escritor madrileño, acostumbrado a las pequeñeces del relato costumbrista o de anécdotas históricas, se supo por entonces un carismático líder de masas capaz de prolongar la resistencia republicana.

La intervención del fiscal Pérez de la Ossa, hermano de Huberto Pérez de la Ossa, un olvidado novelista que fuera criticado por Diego San José en la prensa a causa de sus manejos con motivo de un premio nacional de literatura, se excede con respecto a lo habitual en estos casos. El documento del 9 de agosto de 1939 está firmado por el fiscal jefe, la firma solo es legible por el nombre, José Luis, y coincide con el auto del juez instructor a partir de la labor realizada por su secretario, pero añade nuevos comentarios sobre las referencias periodísticas para sustentar la acusación: «En su colaboración asidua en *El Liberal* injurió constantemente al Caudillo, al Ejército y a sus Generales, a la Iglesia Católica, y a las tropas voluntarias que cooperaron en la campaña, tratando de llevar al ánimo de los lectores de buena fe que el Glorioso Movimiento Nacional era una gran traición por la cual los enemigos del pueblo entregaban al extranjero [praces, supongo que partes] del territorio Nacional como pago a su supuesto servicio. Concretamente en el artículo publicado el 4 de abril de 1937 excitaba al crimen y el asesinato dando pávulo [sic] a un supuesto complot Nacional». A diferencia de otras ocasiones, no he corregido la ortografía y apenas he modificado la puntuación porque los errores cometidos son significativos del nivel académico de la fiscalía. Y, por otra parte, supongo que «las tropas voluntarias» serían las procedentes de Marruecos, Alemania e Italia. Los comentarios acerca de la voluntariedad de dichas tropas los considero innecesarios a la vista de la bibliografía publicada al respecto.

La circunstancia de hacer hincapié en una de las pruebas, concretamente el artículo publicado el 4 de abril de 1937 en *El Liberal*, resulta insólita en estos sumarísimos de urgencia, donde la fiscalía suele limitarse a ratificar con poco más de una línea lo ya instruido. Según el fiscal jefe, los hechos constituyen un delito de adhesión a la rebelión militar, tipificado en el párrafo segundo del artículo 238 del Código de Justicia Militar de 1890: serán castigados quienes «se adhieran a la rebelión con cualquier forma que lo ejecuten y los que, valiéndose

del servicio oficial que desempeñen, propalen noticias o ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla».

El fiscal añadió las agravantes de perversidad del delincuente, trascendencia del delito y gravedad del daño causado. La pena solicitada por los artículos periodísticos es la de muerte, con «las accesorias en caso de indulto y responsabilidad civil indeterminada». El entrañable Dieguito de las tertulias, adonde también acudía Huberto Pérez de la Ossa, se sabría poco después «perverso», aunque no lamentó que entre las accesorias figurara la imposibilidad de participar en el sufragio universal. Todos los censados en España sufrieron la misma accesorias durante décadas sin que les fuera comunicada la pena.

El 14 de agosto de 1939 se celebra la sesión plenaria del primer consejo de guerra contra Diego San José, presidida por el comandante Navajas García. El trabajo de estos sumarísimos se hacía en serie, tal y como testimonia el periodista en *De cárcel en cárcel*, y la sentencia se limita a reproducir los hechos descritos por el juez instructor y el fiscal, siempre a partir de los informes y testimonios del secretario del juzgado. Sin embargo, en esta ocasión se dio una circunstancia poco habitual. El tribunal no compartió el rigor de ambos, por lo que «FALLAMOS que debemos condenar y condenamos a Diego San José, como autor de un delito de excitación a la rebelión militar, a la pena de doce años de prisión mayor como pena principal y a la suspensión de todo cargo y del delito de sufragio [sic] durante el tiempo de la condena, como accesoria, siéndole de abono la prisión preventiva sufrida, igualmente se le condena a la responsabilidad civil sin determinación de cuantía».

La referencia al «delito de sufragio», que no el derecho, merecería el asombro del lector de no mediar las circunstancias trágicas de estos sumarísimos de urgencia. La atenuación de la pena con respecto a la solicitada por el fiscal jefe a partir de la instrucción se justifica porque, de acuerdo con los habitualmente desatendidos criterios del defensor, los hechos constituyen un delito de excitación a la rebelión tipificado en el artículo 240 del Código de Justicia Militar, que castiga «la provocación, inducción y excitación para cometer el delito de rebelión militar, cualquiera que sea el medio empleado para conseguirlo». La tipificación tenía su importancia, puesto que del artículo 238 al 240 la diferencia era la vida (en prisión) o la muerte.

Por otra parte, la sentencia expone que el tribunal ha tenido en cuenta, además del citado artículo, el 173 del Código de Justicia Militar, el 19, 30, 33 y 47 del código penal ordinario y los bandos declarativos del Estado de Guerra. La consulta de esta normativa legal tan amplia es insólita en estos sumarísimos de urgencia, a menudo resueltos con la escueta referencia al temido artículo 238. La conclusión parece evidente a la vista de otros casos instruidos en el Juzgado Militar de Prensa: un trabajo más riguroso, dentro de lo que cabe, por parte del tribunal podía llevar a una condena de doce años en vez de una a muerte, aunque los artículos o las viñetas de los procesados fueran de similar índole. Solo cabía recurrir a un mínimo de piedad, porque de la justicia nunca se supo en estos tribunales actualmente considerados ilegítimos.

Diego San José pudo respirar con cierto alivio, pero alguien con singular celo no le debía querer bien y se mostró escrupuloso en materia de tipificaciones, artículos y otras coartadas de la represión. El 23 de agosto de 1939, el auditor de guerra del Ejército de Ocupación, Ángel Manzaneque y Feltrer -la firma del documento es ilegible, pero mantenemos la hipótesis de que la orden vendría del citado a partir de lo explicado en *Nos vemos en Chicote*-, deja en suspenso la sentencia del tribunal y ordena que se practiquen nuevas diligencias «para determinar con toda exactitud la labor del encartado al frente de la Jefatura de Prensa de la Dirección General de Seguridad, durante el período rojo; así mismo, se hace imprescindible la aportación de los antecedentes políticos sociales del encartado Diego San José de la Torre, tanto oficiales como testificales, debiendo agotarse la información sumarial». La finalidad de lo expresado en el resultando queda explicitada en el considerando, cuando el auditor manda hacer dichas averiguaciones «para fijar la trascendencia penal de los hechos que se imputan, la que indudablemente ha de ser en orden a la imposición de la pena más intensa que la que resulta apreciada hasta ahora». El subrayado es nuestro. El objetivo del mismo es observar con mayor claridad la barbaridad jurídica de quien prefigura y condiciona el resultado de las nuevas diligencias.

El celo del auditor se traduce en que, el 31 de octubre de 1939, el agente Diego García informa acerca de sus consultas entre los vecinos de Diego San José, «un individuo de ideas muy avanzadas, que en sus artículos periodísticos incitaba a la violencia contra las personas de orden, siendo luego desafecto a la

España Nacional». El periodista alegaba entre sus méritos no haber denunciado, durante «el terror rojo», a sus vecinos derechistas, pero los mismos no le debieron corresponder llegada la Victoria. Los nombres de los denunciantes se obvian en el sumario, a diferencia de lo sucedido cuando el testimonio de los vecinos es favorable al procesado. A lo largo de la posguerra, las declaraciones anónimas se multiplicaron y tendían siempre a la inculpación, hasta el punto de que el legislador debió anularlas. El objetivo de tanta delación no era testimoniar lo sucedido, sino la exculpación de quienes delataban o la venganza.

El juez Manuel Martínez Gargallo, de acuerdo con las órdenes del auditor, ordena al secretario del juzgado que averigüe la índole de la labor realizada por el procesado en la Dirección General de Seguridad, un puesto que el fiscal consideraba como «un premio» dado por Manuel Azaña y Ceferino Palencia. Según el correspondiente informe, fechado el 2 de febrero de 1940, el periodista «se limitaba única y exclusivamente a la lectura de la totalidad de la prensa diaria y a recortar y pegar después en cuartillas todos aquellos artículos, notas o cualquier otra clase de trabajos periodísticos que, a su juicio, debieran pasar a conocimiento del director general de Seguridad, bien para confrontar si había noticias de ellos o para tomar notas en sus archivos».

La labor descrita por el secretario no parece justificar que el periodista llevara pistola, tal y como creían los agentes que le detuvieron en abril de 1939. Dado que nunca llegaron al Juzgado Militar de Prensa los «antecedentes políticos sociales» que mandó recabar el auditor y que debía cerrarse la instrucción con rapidez, los «hechos probados» se centraron en los artículos periodísticos reseñados por el secretario, otros supuestos por haber sido publicados en *Heraldo de Madrid* y hasta en la refundición de *Fuenteovejuna* representada en Madrid durante la guerra. Este último tema merece una reflexión aparte, que ya ha sido realizada con brillantez por mi colega Fernando Doménech.

Al día siguiente de recibido el informe del secretario, el juez Manuel Martínez Gargallo decide no esperar la culminación de otras diligencias y ratifica el procesamiento del periodista en un consejo de guerra sumarísimo y de urgencia. Según el auto resumen, Diego San José «llevó a cabo desde las columnas de periódicos de gran difusión una campaña de trascendencia contra el Glorioso Movimiento Nacional, vertiendo toda clase de injurias contra los ideales que lo

encarnaban, contra la figura del Jefe del Estado y las de sus generales más afectos, a quienes retrata constantemente como vulgares traidores y enemigos del pueblo, con todo lo cual hubo de contribuir en la medida de sus fuerzas a la prolongación de la resistencia y a sostener el ambiente gracias al cual era posible ésta». Es decir, las nuevas diligencias llevaron a una práctica repetición del auto resumen anteriormente dictado.

El 14 de febrero de 1940, el fiscal vuelve a pedir la pena de muerte de acuerdo con las instrucciones dadas por su superior mediante escrito del 9 del mismo mes. Su intervención solo queda reflejada con una palabra: «muerte», sin ningún tipo de argumentación. La del defensor fue deliberadamente ambigua porque percibiría el ánimo de condena: «cabe considerar al procesado como autor de un delito de excitación a la rebelión, procediendo imponerle la pena correspondiente a tal delito cuando concurren circunstancias modificativas». Visto el panorama, el defensor prescindió del parecer de su predecesor sin ningún tipo de argumentación y obvió la referencia al artículo 240 o al 238 para que la autoridad militar procediera con total libertad. El procesado negó haber «excitado al crimen siendo su actuación por miedo». En esta ocasión y ante tan reiterado deseo de encajar los hechos en el artículo 238, la sentencia del tribunal presidido por el comandante Antonio Blázquez se inclina por la tesis del fiscal y el 11 de febrero de 1940 condena al periodista a la pena de muerte como autor de un delito de adhesión a la rebelión «con las circunstancias modificativas de perversidad y trascendencia». Los hechos probados son exactamente los mismos. Nada se pudo añadir a instancias del auditor, pero en esta ocasión quedaron tipificados en el temido artículo 238 sin mediar justificación alguna ni tener en cuenta la anterior sentencia, de la que no se aporta referencia alguna hasta el punto de que parece inexistente. De hecho, Diego San José fue juzgado por los mismos hechos por dos tribunales distintos sin que mediara la anulación de la primera sentencia, que quedó en el limbo de lo improcedente a efectos de la represión.

La sorpresa de la condena no solo afectó a Diego San José y su familia, sino que el vocal ponente, el capitán Sergio González Callado, y el alférez Pedro Rodríguez Vera, también vocal del mismo tribunal, considerarían excesiva la pena, incluso para aquellos tiempos de sacas cotidianas. Ambos emitieron un

voto particular. Su alternativa era una petición de treinta años de reclusión mayor. Un capitán y un alférez debían estar muy seguros de sus razones para disentir con respecto a lo firmado por un comandante en funciones de presidente. Diego San José, ajeno a las deliberaciones del tribunal, ni siquiera supo de este rasgo de relativa sensatez entre los militares. No todos los miembros de los tribunales actuaron con similar entusiasmo. Tampoco quienes participaron en otras actividades represivas. *De cárcel en cárcel* así lo evidencia gracias a la ponderación de Diego San José, siempre atento a los rasgos de humanidad, y los historiadores debieran establecer las correspondientes jerarquías en las tareas relacionadas con la represión, sean de carácter jurídico o carcelario.

El 5 de marzo de 1940, el auditor de firma ilegible obvia cualquier debate jurídico a partir de los votos particulares emitidos por los vocales, no manifiesta duda alguna al respecto y, sin que le temblara el pulso, declara firme y ejecutoria la sentencia, «suspendiéndose la ejecución de la pena capital hasta tanto se reciba el enterado de S.E. el Generalísimo Jefe del Estado». El general Franco gozaba por entonces de la misma firmeza en el pulso, pero gracias a la intercesión de su amigo José Millán Astray, fundamentalmente, conmuta la pena de muerte de Diego San José por la de inferior grado, treinta años, el 10 de agosto de 1940.

El 1 de diciembre de 1943, el ministro del Ejército dictó una resolución por virtud de la cual la pena definitiva del periodista pasó a ser de veinte años de reclusión menor. Diego San José estaba por entonces en Vigo y, por la experiencia de casos análogos, vería próxima su salida de la cárcel. Los trámites para la libertad condicional se dilataron unas semanas. La circunstancia le obligó a pasar unas nuevas fiestas navideñas en compañía de los reclusos, pero la excarcelación finalmente se produjo el 12 de enero de 1944, según consta en el correspondiente certificado y aparece en el citado libro de memorias carcelarias.

El 8 de mayo de 1946, Diego San José solicita el indulto total de la pena principal, en virtud del decreto del 9 de octubre de 1945. El fiscal jurídico militar se la concede sin argumentación alguna poco después, el 23 de mayo, aunque la liberación definitiva solo le llegaría el 10 de febrero de 1958. Al menos, el escritor que debió abandonar su querido Madrid pudo vivir cuatro años sin pasar periódicamente por las comisarías. Ningún burócrata del Ejército había olvidado

que la condena por escribir unos artículos de prensa, después de las conmutaciones, había quedado en solo veinte años.

El proceso seguido contra Diego San José fue abordado en *Nos vemos en Chicote* (2015) y en la citada edición de sus memorias carcelarias, siempre gracias a la abundante y accesible información recopilada por su familia. Esta breve nota corrige algunos errores cometidos entonces -sobre todo en lo referente a la participación del auditor Ángel Manzaneque Feltrer-, saca a relucir nuevas irregularidades del proceso y tan solo es el borrador de un futuro capítulo de la monografía sobre el Juzgado Militar de Prensa. El objetivo de editarla en RUA es ponerla a disposición de los historiadores interesados con la pretensión de completar la información o corregir otros posibles errores. Quedo, por lo tanto, a la espera de cualquier sugerencia en dicho sentido, que puede ser remitida al email indicado al principio de esta nota.

Alicante, 30 de julio de 2021